

**JUZGADO SETENTA Y NUEVE CIVIL MUNICIPAL**

(Transformado transitoriamente en el Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples)

Bogotá, D.C., veintiuno de agosto de dos mil veinte.

RADICACIÓN : 2017-01290  
 PROCESO : EJECUTIVO  
 DEMANDANTE(S) : CITIBANK COLOMBIA S.A.  
 (HOY SCOTIABANK COLPATRIA S.A.)  
 DEMANDADO(S) : LUIS EDUARDO MARULANDA A.  
 ASUNTO : SENTENCIA ANTICIPADA

Por cuanto se advierte que no hay pruebas por practicar, dado que las partes no solicitaron la práctica de medio probatorio alguno, se procede a dictar sentencia anticipada en el presente asunto, en aplicación de la regla 2ª del artículo 278 del Código General del Proceso.

**ANTECEDENTES:**

Por intermedio de apoderada judicial, la representante legal de Citibank Colombia S.A. (hoy Scotiabank Colpatria S.A.) solicitó de Luis Eduardo Marulanda Acevedo, el pago de la suma de \$100'334.508,63 incorporada en el pagaré aportado como fuente del recaudo ejecutivo, más los correspondientes intereses de mora.

El conocimiento de la demanda ejecutiva así incoada, inicialmente le correspondió al Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá, el cual la rechazó por carencia de competencia, pues, consideró que el presente asunto es de menor cuantía.

Sometido nuevamente a reparto el aludido libelo demandatorio, le correspondió a este Despacho Judicial, el cual lo admitió a trámite.

Librado el mandamiento de pago deprecado y ante la imposibilidad de notificar personalmente al demandado, ese acto de enteramiento se efectuó por intermedio de la última *curadora ad litem*

designada, quien propuso la excepción de la acción cambiaria, frente al cual se opuso la parte actora en el término de traslado.

Por consiguiente, y como quiera que las partes en litigio no solicitaron la práctica de prueba alguna, se procede en este estadio del proceso a dictar sentencia anticipada, previas las siguientes,

### **CONSIDERACIONES:**

Por reunirse las condiciones necesarias para que el proceso tenga existencia jurídica y validez formal, pues, concurren los presupuestos procesales necesarios para la decisión de fondo, y como tampoco se observa vicio alguno del cual pueda derivarse nocividad procesal capaz de anular la actuación, el Despacho procede a pronunciarse sobre la excepción de prescripción formulada por la *curadora ad litem* acá designada, con base en los planteamientos que se exponen a continuación:

El artículo 2512 del Código Civil define la prescripción como *“un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”*.

Igualmente, el artículo 882 del Código de Comercio dispone que la prescripción es una de las formas de extinguir las obligaciones o mutarlas en naturales.

A su vez, el artículo 2535 del Código Civil establece que *“La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones”*.

De manera que para que este efecto liberatorio se produzca, basta el simple transcurso del tiempo y la proposición oportuna del respectivo medio exceptivo, dado que al fallador le es vedado declararla de oficio.



El artículo 789 del Código de Comercio establece que la acción cambiaria directa prescribe en tres años contados a partir del vencimiento del plazo estipulado en el documento contentivo de la obligación que se ejecute.

Empero, la prescripción puede interrumpirse civil o naturalmente; ocurre lo primero en función de la presentación de la demanda (art. C.G.P.), y lo segundo, cuando antes de vencer el término de prescripción, el deudor reconoce la deuda, expresa o tácitamente, esto es, cuando exprese su voluntad inequívoca de mantener vigente la obligación (art. 2539 C.C.).

De acuerdo con el tenor literal del pagaré base de esta ejecución, su fecha de vencimiento es el 2 de octubre de 2014, por lo que los referidos títulos prescribían el 2 de octubre de 2017.

Es verdad que desde el día siguiente en que se notificó por estado el mandamiento de pago librado en este asunto (16 de noviembre de 2017), hasta la fecha en que se notificó la última *curadora ad litem* designada en este proceso (8 de julio de 2019), transcurrió más del año a que se refiere la norma procesal atrás citada y, por tanto, el libelo genitor de esta acción habría producido el efecto interruptor de la prescripción extintiva alegada, al menos en principio.

Sin embargo, lo cierto es que en este preciso caso no se puede pasar por alto que la parte ejecutante efectuó oportunamente las gestiones para lograr la notificación personal y por aviso del acá demandado, y adicionalmente obtuvo que se le nombrase a un *curador ad litem* para que lo representase judicialmente en el presente litigio, como así se dispuso mediante el auto proferido el 10 de abril de 2018, esto es, mucho antes del vencimiento establecido por la ley para que “se notifique al demandado” y, en consecuencia, para que la presentación de la demanda produzca la interrupción del término prescriptivo que no se haya verificado con antelación de ese acto introductorio (art. 94 C.G.P.), si se tiene en cuenta que el mandamiento de pago librado en este asunto fue notificado por estado el 16 de noviembre de 2017.

Otra cosa muy diferente es que se haya superado esa anualidad por la falta de aceptación y notificación de los varios auxiliares de justicia nombrados en este litigio, lo cual implicó un largo lapso transcurrido entre la primera designación (10 de abril de 2018) y la última (8 de marzo de 2019).

Más, esa es una circunstancia que no se le puede trasladar a la parte actora en el presente proceso, no sólo porque resulta ajena a su voluntad, sino por cuanto aquél extremo del litigio efectuó oportunamente los trámites pertinentes con el fin de cumplir con la carga procesal que le correspondía de notificar al demandado dentro del año siguiente a la notificación del auto de apremio.

En esas condiciones, el Despacho encuentra jurídicamente razonable que se descuente el interregno transcurrido entre la primera designación (10 de abril de 2018) y la última (8 de marzo de 2019), dado que se muestra ciertamente desproporcionado trasladarle tal circunstancia al demandante, justamente porque éste efectuó oportunamente los trámites de la notificación del ejecutado.

Con mayor razón, si adicionalmente se tiene en cuenta que la Corte Constitucional ha señalado, como en la sentencia de tutela invocada por la parte actora, que el demandante que ha ejercido oportunamente el derecho de acción, no puede soportar en su contra la desidia o morosidad de quien debe realizar la notificación, lo cual, en este caso, le correspondía al respectivo *curador ad litem* designado, cuya falta de aceptación y notificación del mandamiento de pago fue la que retardó ese acto de enteramiento hasta que se cumplió con la última defensora de oficio acá nombrada, pues, la parte ejecutante ya había efectuado las cargas procesales que le correspondían.

Así las cosas, se tiene que desde la fecha de la notificación del mandamiento de pago librado en este asunto (16 de noviembre de 2017), hasta la designación del primer *curador ad litem* (10 de abril de 2018), y luego desde el nombramiento de la última defensora de oficio (8 de marzo de 2019) hasta la



data en que se notificó ésta última (8 de julio de 2019), no se alcanzó a superar el término del año previsto en el artículo 94 del Código General del Proceso.

Lo anterior significa que la demanda ejecutiva acá incoada produjo el efecto interruptor de la prescripción extintiva alegada.

Por tanto, se declarará infundado y no probado el aludido medio exceptivo y, como consecuencia de ello, se ordenará seguir adelante con la ejecución, en los términos del mandamiento de pago librado.

Además, se condenará al demandado al pago de las costas procesales causadas.

### **DECISIÓN:**

En mérito de lo así expuesto, el Juzgado Setenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, D.C., administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO.-** Declarar infundada y no probada la excepción propuesta, conforme a las motivaciones que anteceden.

**SEGUNDO.-** En su lugar, se dispone seguir adelante con la ejecución, en los términos del mandamiento de pago librado.

**TERCERO.-** En consecuencia, se ordena el avalúo y posterior remate de los bienes que sean o fueren objeto de cautela en el presente asunto.

**CUARTO.-** Practicar la liquidación del crédito conforme lo dispone el artículo 446 del Código General del Proceso.

**QUINTO.-** Condenar al demandado al pago de las costas procesales causadas en esta instancia, las cuales se ordenan tasar en la oportunidad procesal correspondiente, incluyendo por agencias en derecho la suma de \$400.000,00.

Notifíquese y cúmplase,

**FABIÁN BUITRAGO PÉREZ**  
**JUEZ**

JUZGADO SETENTA Y NUEVE CIVIL MUNICIPAL  
Bogotá, D.C

NOTIFICACIÓN POR ESTADO: La providencia anterior es notificada mediante anotación por ESTADO No 055 hoy 24 de agosto de 2020. (C.G.P., art. 295).

ANDRES DAVID BULLA AYALA  
Secretario